

Ruptura de vínculos diplomáticos con Venezuela

La Cancillería deberá desplegar una hábil y presta negociación, que sin renunciar a la defensa de los principios que animan nuestra política exterior, a la vez permita recuperar contactos diplomáticos básicos, para así no afectar los intereses de Chile.

El gobierno venezolano ha terminado de dar la es-
tocada final a la relación diplomática con Chi-
le, al determinar que nuestro país debía cesar los
servicios consulares que estaba proveyendo en
Caracas y Puerto Ordaz. Ya en agosto pasado el
régimen había determinado la expulsión de todo el per-
sonal diplomático chileno, ello en respuesta a los cues-
tionamientos que hizo el gobierno chileno al proceso
electionario del pasado 28 de julio, donde Nicolás Madu-
ro se hizo reelegir mediante un grotesco fraude. En ene-
ro pasado la Cancillería determinó poner término a la fun-
ción del embajador chileno en Venezuela, ante la inmi-
nencia de que Maduro asumiera en su nuevo período.

El gobierno de Chile ha planteado que a pesar de la drás-
tica decisión consular adoptada por Venezuela, nuestro
país mantiene su postura de no romper relaciones diplo-
máticas con dicho país y prefiere hablar de que las rela-
ciones están "suspendidas", aunque para el régimen ve-
nezolano es claro que están definitivamente rotas.

Probablemente la razón que ha motivado esta recien-
te represalia se debe a que el gobierno chileno ha comen-
zado a elevar el tono contra el régimen ante la evidencia

que ha acumulado la Fiscalía en la investigación del se-
cuestro y asesinato del exteniente venezolano y disiden-
te del régimen, Ronald Ojeda, donde afirma tener prue-
bas de que el asesinato fue orquestado por el número dos
del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello. Ayer, du-
rante la audiencia de formalización contra integrantes de
una célula ligada al Tren de Aragua -a quienes se acusa
de una serie de crímenes, entre ellos el de Ojeda-, el Mi-
nisterio Público proporcionó más antecedentes, como que
el pago se habría orquestado en Perú. La ministra del In-
terior había planteado días antes que de confirmarse esta
participación, Chile recurriría ante la Corte Penal Inter-
nacional. En la gira que el Presidente Boric hizo esta se-
mana a Uruguay, volvió a referirse en duros términos al
régimen venezolano.

El gobierno de Chile ha sido señero en cuanto a denun-
ciar las graves violaciones a los derechos humanos en Ve-
nezuela y el fraude electoral cometido por Maduro. Esa
línea, coherente con los principios que nuestro país de-
fiende en materia de política exterior, debe seguir sien-
do enarbolada, y de acreditarse en el proceso judicial que
el régimen estuvo implicado en el asesinato del extenien-

te Ojeda cabe esperar una enérgica respuesta por parte de
las autoridades chilenas.

Lo anterior no es incompatible con la necesidad de res-
tablecer algún tipo de contacto diplomático con Venezue-
la, aun cuando sea a nivel consular. El hecho de que nues-
tro país ya no pueda ofrecer siquiera servicios consulares
en territorio venezolano afecta a miles de compatriotas
que residen allá, como también a los venezolanos que ne-
cesitan viajar a Chile, pero ello de algún modo se podría
sobrellevar procurando que terceros países puedan asu-
mir los servicios consulares a nombre de Chile. El mayor
problema radica en los más de 700 mil venezolanos resi-
dentes en Chile, de los cuales más de 200 mil se encuen-
tran en situación irregular, existiendo unas ocho mil ór-
denes de expulsión que aún no han logrado ejecutarse;
sin algún tipo de vínculo diplomático, dichas órdenes en
la práctica no podrán ser materializadas.

De allí que la Cancillería deberá desplegar una hábil y
presta negociación, que sin renunciar a la defensa de los
principios que animan nuestra política exterior, a la vez
permita recuperar contactos diplomáticos básicos de
modo que no se afecten los intereses de Chile.